

Cambiar algo, para que nada cambie

por Eduardo J. Vior¹

Apenas Dilma intentó orientar la movilización popular hacia las reformas democráticas pendientes, fue trabada por las corporaciones, los medios y la policía. La lucha por el poder se intensifica.

“Si quieres venir a una manifestación, aguanta los palos”. Con esta fórmula didáctica explicó un oficial de la Policía Militar (PM) de Brasilia al estudiante Ernaldo Vieira en la noche del miércoles 26, porque habían encerrado a los manifestantes que protestaban contra la corrupción y por la reforma política en la llamada Explanada de los Ministerios, antes de ahogarlos con gas lacrimógeno. La ecuación pedagógica está siendo aplicada por la policía en todas las manifestaciones que se suceden ininterrumpidamente desde hace tres semanas en todo Brasil: miles de personas se manifiestan pacíficamente, un grupo de vándalos se separa y ataca edificios públicos, la Policía Militar los deja hacer, para luego reprimir bárbaramente y criminalizar a los detenidos. La represión policial, el freno corporativo y la cooptación de las movilizaciones por los medios conservadores dominantes se combinan en la respuesta de la derecha al intento de la Presidenta Dilma Rousseff de orientar las movilizaciones populares hacia reformas democráticas que consoliden las políticas sociales de la última década y aseguren su reelección. Dos proyectos antagónicos pugnan por el poder en Brasil.

Ante los 27 gobernadores estatales y 26 alcaldes de las principales ciudades del país reunidos en el Planalto Dilma Rousseff propuso en la tarde del lunes 24 la adopción de cinco pactos nacionales destinados a impulsar reformas democráticas largamente pendientes: 1. Responsabilidad fiscal y control de la inflación; 2. Plebiscito para convocar a una asamblea constituyente sobre la reforma política; 3. Salud; 4. Educación y 5. Transportes. Miles de millones de reales deben fluir hacia los municipios, para mantener sin alzas los boletos del transporte público urbano, una lacra que motivó las gigantescas manifestaciones del mes de junio. A salud y educación debe destinarse el 100% de los ingresos que se obtengan por la explotación del petróleo de la cuenca submarina frente a Rio de Janeiro, a 7.000 metros de profundidad. Limitar el sobreendeudamiento de estados y municipios es una consigna compartida por todas las fuerzas políticas, aunque pocas ciudades revierten la tercerización de los servicios inaugurada en los años 90. Pero es el plebiscito para convocar la asamblea constituyente específica que debe introducir reforma política el que se ha convertido en piedra de toque de la lucha por el poder desatada por la Presidenta.

Dilma no consultó ni a su propio partido para hacer los anuncios del lunes 24. Evidentemente sólo un “núcleo duro” (como lo llamó un columnista del conservador Folha de SãoPaulo) y seguramente su mentor Lula participó el fin de semana pasado en la toma de esta decisión estratégica. Convocar al pueblo a decidir sobre la reforma política

¹ Por favor, manténganme el Eduardo “J.” Vior. Es mi marca de fábrica.

mediante un plebiscito (no un referendo que es sólo consultivo, como titularon los medios) implica saltar por encima del Congreso y la Justicia y devolver la soberanía a su dueño originario. “Es un recurso bolivariano”, se quejó otro columnista de Folha.

El propio Vicepresidente Michel Temer, del centrista PMDB, se quejó de la falta de consulta y rechazó la convocatoria a asamblea constituyente. El ministro de Educación Aloisio Mercadante ofició toda la semana de vocero presidencial, desplazando a la Jefa de la Casa Civil, senadora Gleisi Hoffman, esposa del ministro de Comunicaciones Paulo Bernardo. Éste último sobresalió en el último tiempo por su oposición a la elaboración de una ley de medios que democratice la prensa y quite a la Red Globo su desmesurada participación en la pauta publicitaria oficial. Ambos cónyuges, oriundos del Estado de Paraná que la senadora aspira a gobernar a partir de 2014, están vinculados a la hidroeléctrica Itaipú Binacional y de la senadora se dice que tiene ligazones más íntimas con un directivo de la empresa.

Aunque la Presidenta desistió al día siguiente de convocar a una asamblea constituyente, porque –como dijo el presidente del PT, Rui Falcão- “llevaría demasiado tempo”, mantuvo el llamado a realizar un plebiscito, para que el pueblo imponga la reforma política. Se trata de reformar las leyes de partidos políticos y de elecciones, prohibiendo el financiamiento de los partidos por personas jurídicas, estableciendo el financiamiento público de los mismos, la lista cerrada, para forzar la lealtad de los candidatos a los partidos, ajustando la representación al número de habitantes de cada distrito y colocando un piso del 3% de los votos para mantener la personería de los partidos. La creación de nuevos estados y numerosos municipios pequeños durante la dictadura de 1964 a 1985 sirvió para disminuir la representación parlamentaria de las grandes ciudades y aumentar el número de senadores de los estados menos poblados. Al mismo tiempo las leyes de elecciones y de partidos políticos vigentes dan a los candidatos individuales una gran autonomía respecto a sus propios partidos y les permiten financiarse con donaciones de empresas que más tarde se cobran con licitaciones públicas. Se calcula que las empresas de la construcción destinan en promedio el 5% de sus ganancias a las donaciones electorales.

No por casualidad fue Joaquim Barbosa, presidente del Supremo Tribunal Federal (STF) y del Consejo Nacional de Justicia (CNJ) el encargado de presentar públicamente la alternativa conservadora. Luego de su reunión con la presidenta el martes 25 y ante el plenario del órgano de gobierno de la Justicia declaró que “el país precisa una reforma política que disminuya la influencia de los partidos en la selección de los candidatos y aumente la participación popular”. Según él, “la población no quiere más decisiones tomadas por medio de ‘conchabados’. Pienso que hay una voluntad del pueblo brasileño de disminuir o mitigar el peso de los partidos políticos sobre a vida política do país”, agregó. Barbosa resaltó que no defiende la “supresión” de los partidos, pero que está favor de candidaturas individuales para todos los cargos, incluso la Presidencia de la República, no atados a siglas partidarias.

El presidente del STF saltó a la fama de manos de los medios hegemónicos el año pasado, cuando se destacó como impiadoso castigador de los procesados por el affaire del “mensalão”. En un país sin tradición republicana ni movimiento popular como Brasil, cuyo pueblo mayoritariamente todavía anhela la venida de un San Jorge justiciero que mate de

un lanzazo al dragón de la corrupción, el primer miembro negro del máximo tribunal del país, cuyo mandato de dos años vence precisamente el año próximo, prepara su plataforma para lanzarse a competir con Dilma Rousseff por la Presidencia de la República. Encuestas realizadas la semana anterior por DataFolha, la empresa de investigación de opinión del matutino paulista, entre manifestantes, lo colocaron como el candidato preferido de las jóvenes clases medias movilizadas.

Todo político brasileño que se precie se dedica por estos días a halagar los reclamos de las manifestaciones. No hizo falta esfuerzo, para que la Cámara de Diputados desistiera de sus resistencias de meses y resolviera el miércoles 26 destinara el 70% de los futuros réditos petroleros a la educación y el 30% al mejoramiento del Sistema Único de Salud (SUS). Más resistencias despertó en cambio entre diputados y colegios médicos la propuesta de la Presidenta para reclutar varias decenas de miles de médicos extranjeros dispuestos a trabajar en los ambulatorios del SUS en la periferia de las grandes ciudades y en regiones rurales y selváticas. Es que la corporación médica ve peligrar sus privilegios.

Igualmente oportunista resultó la liberación de impuestos sobre el transporte automotor urbano colectivo, para mantener sin cambios las tarifas. Así se garantiza que las empresas concesionarias de ómnibus (unos pocos consorcios que atienden la gran mayoría de los municipios con ómnibus viejos e incómodos) sigan llevándose el 70% del ingreso por boletos.

También fue unánime el apoyo parlamentario al endurecimiento de las leyes que castigan la corrupción activa y pasiva y delitos conexos, convirtiéndolos en delitos graves sancionables con penas de prisión. Al mismo tiempo la cámara baja rechazó por 430 votos contra 6 la Propuesta de Enmienda Constitucional 37 que proponía reafirmar la facultad constitucional de la Policía Federal (PF) para investigar delitos penales. Si bien esta facultad fue establecida por el art. 114 de la Constitución federal de 1988, con los años se hizo habitual que las fiscalías investigaran por su cuenta. Ante la falta de controles democráticos sobre el accionar del Ministerio Público que derivó entre otros en la investigación partidista del “mensalão” por el Procurador General Roberto Gurgel, la Presidenta había propuesto hace dos años la PEC 37 para reforzar el mandato constitucional. Sin embargo, como los medios hegemónicos y la corporación judicial consiguieron exitosamente instalar en las manifestaciones de junio la consigna del rechazo a la reforma, la mayoría del parlamento que hasta hace dos semanas apoyaba la PEC votó el miércoles masivamente por su rechazo. Todos los medios festejaron alborozados “el triunfo de la democracia”. Ahora pueden seguir sin límites marcando la agenda de las fiscalías.

Dilma reaccionó rápidamente a la presión de las calles asumiendo sus consignas y orientándolas hacia la profundización de las reformas democráticas, pero sus oponentes no se quedaron atrás en la maniobra y pasaron a hacer como si se adhirieran al proceso reformista, pero a costas de las finanzas públicas y desviando las manifestaciones hacia la denostación del gobierno. Para ganar esta carrera, la presidenta se reunió el lunes 24 con representantes del Movimiento Pase Libre y el miércoles con las cinco centrales sindicales que convocaron a una huelga general para el 11 de julio, para apoyar las reformas y apoyar sus propias reivindicaciones.

No obstante, para conquistar la calle, la presidenta precisa líderes de los que no dispone. Descabezada la conducción del PT, el partido se adocenó y se alejó de sus bases. La presidenta tampoco cultivó el contacto con sus bases al que era tan afecto Lula. Sonó quizás como un eco de esa distancia, cuando los representantes del MPL, al salir de la reunión con Dilma Rousseff el pasado lunes, declararon que la Presidenta “no está preparada para entender los problemas del transporte público urbano”.

La lucha por la conducción de las manifestaciones se da con especial virulencia en Internet. "Lo que yo hice fue ensuciar al gobierno brasileño en el mundo", definió Thismr Maia, pseudónimo de Silvio Roberto Maia Junior, portavoz del movimiento Change Brazil, los videos que subió a la Web. Nacido el 14 de junio, el movimiento pide por boca de Maia videos hablados en inglés la “ayuda” internacional contra el gobierno “opresivo” de Dilma Rousseff. En un estudio bien iluminado y con una grabación de calidad profesional, Maia comienza hablando sobre el aumento de la tarifa de ómnibus, para inmediatamente citar los levantamientos populares “espontáneos” en Turquía e na Siria. Maia condena a la clase política brasileña y declara que las manifestaciones se dirigen contra el robo y la mala fe generalizadas. En las protestas siguientes, coincidentemente, muchos gritos se dirigieron contra los políticos y pidiendo el juicio político a la presidenta. El 17 de junio lo retomaron los presentadores de los principales programas de noticias de la TV dominante. Así desviaron la manifestación del jueves 20 de su objetivo inicial de festejar el triunfo del MPL, para agitar contra los partidos políticos y sindicatos a los que expulsaron violentamente de la marcha.

Maia festeja: “Yo sólo quería atraer la atención mundial sobre Brasil, declara, y lo conseguí. Ahora, con presión internacional Dilma y compañía están más obligados a oírnos”, declara.

La lucha por la conducción de las movilizaciones se está agudizando. En la semana que pasó cambiaron el eje y la base de las movilizaciones. A excepción de la gran manifestación en Belo Horizonte durante el partido Brasil-Uruguay, en las grandes ciudades se redujo la presencia de la clase media y aumentó la de los sectores populares de las periferias, mientras que la movilización de las clases medias se trasladaba a las ciudades medianas y pequeñas. El martes se movilizaron en Rio de Janeiro varios miles de habitantes de Rocinha, con 250.000 habitantes la favela más grande del continente, para reclamar al gobernador del Estado de Rio de Janeiro Sergio Cabral (PMDB, aliado del gobierno federal) la satisfacción de reivindicaciones largamente levantadas por esa población marginal. El jueves 27 la PM paulista desalojó en la zona Este de la metrópolis a activistas del Movimiento de Trabajadores Sin Techo (MTST) que, aliados al Movimiento Pase Libre (MPL), habían ocupado un predio largamente vacío solicitando su expropiación para un proyecto de viviendas populares. Poco a poco los sectores populares tratan de apropiarse de las calles.

Las movilizaciones callejeras todavía están capturadas por los medios hegemónicos que les cambiaron el eje, orientándolas hacia la lucha contra la PEC 37. Se calcula que en la preparación de la manifestación paulista del jueves 20 fueron enviados a los grupos focales 600 mensajes telefónicos por minuto. Sólo una gran organización, con personal entrenado y dinero, puede hacer esto.

Dilma reagiu rápida e inteligentemente, cambiando su agenda de gobierno. A presidenta parece ter saído de um período de governo pretensamente “técnico”, exaltado pela mídia como um salto adiante em relação ao seu antecessor. Durante dois anos e meio, Dilma governou principalmente a partir de planilhas e modelagens de metas e desempenhos. Dirigir um país seria algo como gerenciar um empreendimento que já está com suas engrenagens e rumos azeitados, bastando apertar um parafuso aqui e outro ali.

Contato com o povo e o mundo político foi feito, no mais das vezes, através de intermediários e de pesquisas quantitativas e qualitativas. Algo próprio de quem não tem muita familiaridade com a política estrito senso.

Algo bem diverso da atuação do ex-presidente Lula em seu segundo mandato (2007-11). O então mandatário – depois da crise do mensalão – usou e abusou de visitas a todo o país e deixou de conceder entrevistas exclusivas a órgãos de imprensa que o atacavam impiedosamente. Passou a dar coletivas a toro e a direito, em quase todas as manifestações públicas e a falar mais. Desceu dos palanques para apertar mãos e cumprimentar os que acorriam a inaugurações e atividades oficiais.

Dilma faz um governo de gabinete. Justamente o que está sendo criticado nas manifestações. Pode ser que a presidenta tenha descoberto que nada substitui a política na atividade administrativa. A segunda possível – atenção, a palavra é “possível” – alteração nos rumos do governo é mais profunda. Até aqui o lulismo realizou poucas mudanças que universalizassem direitos das camadas populares. Não produziu algo com a grandeza e abrangência de uma Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), como Getúlio Vargas, em 1943.

Mas realizou um programa social focado de grande êxito, o bolsa família, aproveitou-se de um ciclo internacional favorável para aumentar níveis de emprego e renda e expandiu o crédito ao consumidor. O resultado foi o acesso dos pobres ao consumo, razoáveis índices de crescimento econômico e a ilusão de que se poderia realizar mudanças sem rupturas.

O que são mudanças sem rupturas? Não se trata de fazer revolução, mas de mudar a repartição das receitas tributárias do Estado, taxando-se os mais ricos e destinando o excedente para a disseminação de direitos e serviços públicos universais.

É o que estará em pauta hoje: a melhoria dos serviços públicos. Algo que a marqueteira da campanha de Fernando Haddad, em São Paulo, anunciou mas não cumpriu: “Com Lula, a vida melhorou da porta para dentro de sua casa; da porta para fora tudo continua ruim”. O alvo eram os governos de Gilberto Kassab (PSD) e Geraldo Alckmin (PSDB).

Os serviços “da porta para fora” não melhoram por duas razões: foram privatizados em boa parte – ou seja, são regidos não pelo interesse universal, mas pelo lucro – e carecem de investimento. Transportes, energia e comunicações foram passados a particulares na bacia das almas pelos governos tucanos (1995-2003). O PT envereda de forma envergonhada pelo mesmo caminho.

Educação pública de primeiro e segundo grau sofre com baixos salários de professores e técnicos e falta de investimento (a educação superior conheceu nos últimos dez anos notável expansão, mas ainda insuficiente diante das arapucas do ensino privado). O SUS conhece um sucateamento paulatino e o avanço da medicina privada. E o sistema de ônibus nas cidades representa uma caixa preta a ser aberta.

Se o anunciado for apenas subsídios e desonerações para melhorar a qualidade e não mexer no lucro do empresariado dessas áreas, teremos uma bela foto da presidenta com os mandatários dos estados ao final da reunião e resultados de durabilidade incerta.

Se a ação do Estado realmente mudar, intervindo, planejando, estipulando objetivos e cassando concessões que não atendam a patamares mínimos de preços e qualidade, aí a virada será mais profunda.

Do lado dos movimentos, Dilma também pode ensejar um giro em sua gestão. Até agora a presidenta teve no terceiro andar do palácio do Planalto a companhia de gente como empresários de comunicação, maganos do agronegócio, financistas e chefes de Estado estrangeiros. Pouca atenção deu a representantes de movimentos sociais, como sindicalistas, indígenas, mulheres, comunidade GLTB, trabalhadores sem terra e outros. O resultado é uma antipatia desses setores com aquela que o marqueteiro João Santana já classificou como a “rainha” do Brasil.

O encontro com os rapazes e moças do MPL pode dar sequência a conversas com outros movimentos. Mas não bastará fazer, como Lula, que colocou o boné do MST na cabeça, mas não acelerou a reforma agrária.

As mobilizações de rua foram feitas a partir de um modelo horizontal, sem lideranças, e têm muito de espontaneísmo. É algo interessante na deflagração da coisa, mas dificulta entendimentos e aprofundamentos de pautas. O pessoal do MPL que estará no gabinete presidencial leva na bagagem uma espetacular vitória sobre prefeitos e governadores, inédita na história recente: a redução das tarifas.

Os protestos devem continuar em todo o país, até porque são incontroláveis. A direita está nas ruas – e na mídia – tentando disputar suas bandeiras. A agenda presidencial é parte desse jogo de grande envergadura.

Constituinte exclusiva ou Plebiscito para realizar a 'ampla e profunda' reforma política, anunciada pela Presidenta Dilma na 2ª feira? Não importa a forma, desde que se promova um efetivo *aggiornamento* da democracia brasileira, em sintonia com os anseios sinceros da rua por mais participação e menor influência do dinheiro grosso no sistema político nacional. O mais importante é que o governo saiu da defensiva e desenhou o escopo de um grande debate nacional, capaz de incorporar as vozes e inquietações das ruas. E, sobretudo, decidiu dar à soberania popular o comando das mudanças do ciclo que se inicia.

A Presidenta Dilma respondeu com perspicácia histórica ao clamor das ruas. Disparou na direção certa. A questão que aglutina a fragmentação das bandeiras desordenadas do nosso tempo é o poder. Todo o processo de globalização e financeirização apoia-se na captura da

soberania popular pelo dinheiro grosso. Governos se emasculam. O voto se desmoraliza. Os partidos se descarnam. A existência se acinzentada. A lógica do negócio imobiliário se apodera das cidades. A mídia conservadora é a torre de vigia desse sequestro, que esfarela o poder da sociedade sobre ela mesma. Ou as lideranças e partidos revertem essa espiral, ou vence a exaustão caótica. E com ela a bandeira já sussurrada pela direita e seus ventríloquos obsequiosos: 'ordem e um Napoleão de toga'.